

MINUTA LEGISLATIVA

El Estado de Chile ha debido reaccionar rápidamente para hacer frente a los efectos económicos y sociales que ha acarreado la pandemia del Covid-19. Así, el Gobierno en conjunto con el Congreso, han impulsado una serie de proyectos que apuntan a unir esfuerzos que permitan fortalecer la red de salud y promover un plan de vacunación exitoso en lo que va de este año.

No obstante lo anterior, las medidas restrictivas de movilidad -las cuales apuntan a disminuir las tasas de contagio del virus- han generado colateralmente un profundo daño a la economía local.

La paralización de las faenas productivas, comercio local y millones de trabajo, han generado una disminución de los ingresos de las familias y la pérdida de millones de empleos, siendo las micro y pequeñas empresas las principales organizaciones afectadas, debido a que se ha interrumpido su normal desarrollo, afectando así sus niveles de venta, liquidez y capital de trabajo.

A raíz de esta situación, es que extraoficialmente se ha dialogando respecto a la necesidad de establecer un marco de entendimiento, o también denominado mínimos comunes, los cuales apuntan a fortalecer y ampliar la red de protección social impulsada en tiempos de pandemia y extendiendo su alcance a las pymes.

Así, es que junto con trabajar en el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia con carácter universal, es que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de generar nuevos mecanismos que permitan establecer nuevos apoyos a las micro y pequeñas empresas, otorgándoles diversos bonos con cargo fiscal, permitiéndoles enfrentar de mejor manera las dificultades que actualmente se están presentando.

Por lo anterior, es que el Ejecutivo ha ingresado al Senado, el proyecto que busca generar estas herramientas de apoyo a las MYPEs (boletín N° 14.280-05), a fin de discutir un bono de alivio para personas naturales y jurídicas que hayan informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos al 31 de diciembre del año 2019 y en el caso en que sus ingresos por ventas no superen las 25.000 UF al año. Además, quienes pretendan acceder a este subsidio, deberán haber registrado ingresos por ventas de sus respectivos giros durante el presente año 2021, al menos dos meses, o bien, haber tenido contratado como mínimo a un trabajador durante el año 2020.

La iniciativa del Gobierno, busca establecer este bono de alivio mediante la suma de \$1.000.000, el cual se pagará por única vez a través de Tesorería General de la República, veinte días corridos después de haber solicitado dicha ayuda.

De igual forma, mediante el artículo segundo del Título I de la iniciativa legal, se busca establecer el otorgamiento de un bono adicional variable para dichas micro y pequeñas empresas, en donde el monto de la ayuda alcance a lo correspondiente al pago de tres meses del promedio del IVA declarado en el año 2019 y con un tope de \$2 millones.

En tanto, el artículo 3° del proyecto señala que dichos bonos -de alivio y adicional variable- se vean incrementados en un 20% de su valor en el caso de que la persona natural beneficiaria del beneficio, sea de sexo registral femenino. Así mismo, busca establecer que para el caso de las personas jurídicas, se vea reflejado este mismo incremento en aquellos casos en que el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada o cuyo único titular de una sociedad por acciones, posea sexo registral femenino con fecha a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

A su vez, el artículo 4° del proyecto impulsado por el Gobierno, busca establecer un bono a los empleadores que hayan tenido trabajadores suspendidos conforme a la Ley N° 21.227, también conocida como Ley de Protección al Empleo, al 31 de marzo del presente año. Dicha ayuda, tendrá por objeto exclusivo el pago de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores, y el monto será cuatro veces el monto de las cotizaciones de los trabajadores con contrato de trabajo vigente a dicha fecha, y sólo podrá ser solicitado por personas naturales o jurídicas que fueren empleadores y tengan contratados hasta 49 trabajadores al 31 de marzo del 2021.

El artículo 10° del texto propuesto, busca crear un Fondo de Apoyo y Recuperación para las Pymes con cargo a la partida 50 del Presupuesto del Sector Público correspondiente al presente año, destinando financiamiento a los bonos del presente proyecto de ley, así como al financiamiento de las obligaciones fiscales contenidas en los programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas.

MINUTA LEGISLATIVA

La pandemia del Covid-19 ha golpeado profundamente a la economía en todos los países del mundo. Chile no es la excepción, y junto con deteriorar estremecer el escenario local, la crisis sanitaria ha generado pérdidas de cientos de miles de empleos en tan sólo unos meses.

El Gobierno, ha debido enfrentar la pandemia a través de una serie de acciones que permitan hacer frente al deterioro económico y social que ha afectado a las familias chilenas. Así, el Ejecutivo ha impulsado y promovido una agenda en materia de protección social, con un fuerte foco en proteger los empleos y preservar la existencia de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Dentro de la batería de iniciativas que ha desarrollado el Gobierno, se destacan la Ley N° 21.227, también conocida como Ley de Protección del Empleo, y que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en situaciones excepcionales a raíz de la emergencia sanitaria; la ley N° 21.247, también conocida como Ley de Crianza Protegida y que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas.

Esto último, resulta fundamental en circunstancias en que el Gobierno se ha propuesto dirigir los esfuerzos en fomentar un desarrollo integral de las mujeres, y en consideración respecto a que la pandemia ha generado enorme impacto en la población de sexo femenino del país, socavando más de una década de avances en materia de inserción laboral femenina.

En tal sentido, el Ejecutivo ha presentado una iniciativa de ley ante este Senado (Boletín N° 14.260-13), buscando complementar los actuales mecanismos dispuestos en las leyes de Protección al Empleo y de Crianza Protegida, otorgando prestaciones de carácter excepcional a aquellas trabajadoras que, habiendo hecho uso de una o más licencias médicas preventivas prenatales, no pueden reintegrarse a sus puestos de trabajo por motivos de cuidado de sus niños o niñas menores de dos años, respecto de los cuales tengan la tuición y cuidado personal.

Según lo argumentado por el Gobierno, y correspondiente a cifras evacuadas por la Superintendencia de Pensiones, al 9 de mayo de este año 2021, la cifra de trabajadoras acogidas a la ley N° 21.247 de Crianza Protegida, alcanzó las 19.232, siendo el 95,7% mujeres. Adicionalmente, se reporta que 550 mil mujeres han salido de la fuerza laboral en los últimos 12 meses: En la mayoría de los casos, por razones y responsabilidades de cuidados.

De acuerdo a la realidad cultural del país, se registra que en la mayoría de los hogares de Chile, son las mujeres quienes están a cargo de las labores de cuidado, teniendo por consecuencia que muchas de ellas se ven obligadas a tener que abandonar sus roles de trabajadoras para hacer frente con sus labores de madres.

Así, es que mediante el texto que impulsa el Ejecutivo, se busca generar un mecanismo de protección para los trabajadores dependientes, independientes y del sector público, asegurando la continuidad de la mayor parte de sus ingresos con posterioridad al término de la licencia médica preventiva parental; cuando no pudiesen reincorporarse a sus funciones laborales, a fin de asumir el cuidado de niños y niñas menores de dos años durante la pandemia y crisis sanitaria por la que atraviesa Chile y el mundo.

La iniciativa del Gobierno busca modificar la ley N° 21.247 de Crianza Protegida, estableciendo que los trabajadores dependientes que hayan hecho uso de al menos una licencia médica preventiva parental según lo establecido en el artículo 1° de dicha ley, y que no puedan retomar sus funciones laborales producto del cuidado, puedan suspender de manera unilateral los efectos de sus respectivos contratos de trabajo, teniendo derecho a percibir por hasta tres meses una prestación mensual equivalente al 70% del promedio de la remuneración imponible. Estas prestaciones serán con cargo al Seguro de Desempleo de la ley N° 19.728, conforme las reglas generales de dicho seguro.

Así también, se contempla para los trabajadores independientes que tengan bajo su cuidado personal el de uno o más niños o niñas menores de dos años, y que no puedan retomar sus funciones por motivos de cuidado; que estos puedan percibir un bono con cargo fiscal equivalente al 70% del monto que sirva como base de cálculo del subsidio que han recibido durante el uso de la licencia médica preventiva parental. Dicho instrumento, ha de ser solicitado al Instituto de Previsión Social (IPS) y no tendrá carácter de imponible ni tributable. De igual modo, se busca establecer que sea la Superintendencia de Seguridad social el organismo a cargo de fiscalizar el otorgamiento del bono y dictar la norma general que permita reglamentar los distintos aspectos del mismo.

Finalmente, se pretende establecer que los funcionarios del sector público a los que se refiere el inciso primero del artículo 194 del Código del Trabajo, que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas menores de dos años, y que se encuentren imposibilitados de retomar sus funciones laborales por motivos de cuidado, tengan derecho a un permiso sin goce de remuneración por hasta tres meses, período durante el cual se quiere establecer un bono mensual, de cargo de la respectiva entidad

empleadora, y el cual equivale al 70% de la remuneración bruta que le corresponde en el respectivo mes, con tope de 122,6 UF.

